

dad, en virtud de los cuales, sentenció á sus poderdantes; al primero, á cuatro años de presidio, y al segundo á ocho, cuya condena extinguen en la actualidad en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Visto el informe justificado, rendido por la autoridad respectiva; el pedimento del Ministerio público, así como las constancias que obran en el expediente, y todo lo demás que ver convino. Considerando: que la Gefatura política del Centro, ha sometido á juicio y sentenciado á Torres y Castellanos, sin otro fundamento que el de la fama pública de haber cometido algunos delitos, y sin señalar hecho determinado. Considerando: que los delitos á que se refieren los testigos, en el proceso sumario mandado practicar por la Gefatura, son anteriores á la ley que ha normado las determinaciones de la autoridad ejecutora del acto. Considerando: que si los quejosos están acusados de algun delito, la autoridad tiene el deber imprescindible de consignarlos al Juez competente; resultando por consecuencia, que la Gefatura política del Centro ha violado con sus procedimientos las garantías que otorgan los artículos 14, 20 y 21 de la Constitución federal de la República. Con tales fundamentos, se declara:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Oaxaca, que mandó en nombre de los Poderes de la Union, amparar y proteger á los quejosos contra la determinacion de la Gefatura política del Centro de aquella ciudad, en virtud de la cual, fueron sentenciados á presidio en la fortaleza de Ulúa.

Devuélvase sus actuaciones al Juez remitente, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.—

S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Artcaga.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Son copias. México, Marzo veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa seguida ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, contra María Dominga Lozano, por moneda falsa.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que á pesar de la suma eficacia y diligencia que por ese Juzgado se ha tenido para aclarar el delito de circulacion de moneda falsa, porque se ha estado juzgando á Dominga Lozano, nada se ha conseguido, pues solo aparece que trataba de comprar á Rafael Gonzalez dos guitarras de á cuartilla, con el peso de cobre de los dos que se le recogieron. No se encontró en la casa de aquella mujer, ningunos útiles ni otros objetos con que pudiera creerse que fabricaba la moneda de cobre; tampoco está comprobado, que por el mismo delito haya estado presa anteriormente, pues segun asegura la rectora de Recogidas, en otras veces que ha sido reducida á prision, ha estado por distintos hechos. Por otra parte, ha sido imposible evacuar la cita hecha por Mateo Carlos de la mujer, que segun asegura en su declaracion de fojas 7 vuelta, le manifestó, que la Lozano habia sido fiada por su esposo en dias anteriores y por el mismo delito.

Resulta de lo expuesto, que habiendo una

verdadera duda acerca de la responsabilidad de la Lozano, debe estarse á lo mas favorable, supuesto que no ha podido obtenerse la justificacion debida del hecho criminal por que ha sido acusada, y deberse tener como posible la excepcion que ha opuesto, de que las monedas que se le recogieron, tuvieron su origen de haber dormido con un carrero la noche anterior; en cuya virtud, en concepto del Ministerio, debe ponérsele en libertad por no haber méritos para que se le imponga pena alguna, y se le deben devolver las monedas buenas recogidas, é inutilizarse la falsa.

Tal es mi parecer que sujeto al mas ilustrado de ese Juzgado.

San Luis Potosí, Noviembre veintiocho de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Gregorio Vazquez.*

Sentencia del Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Diciembre diez y siete de mil ochocientos setenta.

Vista la presente causa seguida de oficio contra Dominga Lozano, por andar introduciendo moneda falsa en la plaza del comercio de esta ciudad. Vistas las diligencias con que se comprueba el cuerpo del delito, y son: el certificado extendido por el que suscribe, y el reconocimiento hecho en la casa de moneda. Vistos los cargos hechos á la reo, la defensa y pedimento del ciudadano Promotor Fiscal.

Considerando: que está plenamente probada la existencia del delito, pero esto no basta para condenar á la Lozano, porque hasta hoy no se ha probado su culpabilidad, —pues no hay en su contra mas que la declaracion de Rafael Gonzalez, en la que, aunque se prueba el hecho de que la reo le pagaba con moneda de cobre, esto no es bastante para convencerla de que ha cometido el delito, pues no se le ha convencido de que obró con la malicia que es necesaria para asegurar que hay delito.

Considerando: que negando la Lozano, y no habiendo prueba plena en contrario, debe absolversele, ley 1ª, título 14, Partida 3ª De conformidad con lo pedido por el ciudadano Promotor Fiscal, y con fundamento de la ley antes citada, y el artículo 18 de la Constitucion federal de la República, debia de absolver y absuelvo á María Dominga Lozano del cargo que se le hizo, de andar circulando moneda falsa en el comercio de esta ciudad; y en consecuencia, póngasele en libertad bajo de fianza. 2ª Inutilítese el peso falso y vuélvanse á la Lozano los ciento doce y medio centavos. 3ª Notifíquese y remítase al Tribunal de Circuito para su revision. El ciudadano Lic. Cipriano J. Martinez, Juez de Distrito del Estado, lo mandó y firmó. Damos fé.—(Firmados.)—*Lic. Cipriano J. Martínez.*—*Rafael Guzman.*—*Vicente Briga.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL DEL TRIBUNAL DE CIRCUITO.

Ciudadano Magistrado del tribunal de circuito.

El Promotor Fiscal dice: que en treinta y uno de Octubre del año próximo pasado (1870), el ciudadano Gefe Político de San Luis Potosí, remitió á disposicion del ciudadano Juez de Distrito, á María Dominga Lozano, en virtud de haberla encontrado el ciudadano Mateo Carlos, pretendiendo cambiar al ciudadano Rafael Gonzalez, las monedas cuya descripcion obra en el certificado de fojas 7 de esta causa. Y fueron, un peso del cuño de San Luis Potosí, otro del de Zacatecas, y un real muy liso. Examinadas en la casa de moneda, resultó ser falsa la del tipo de Zacatecas, y corre agregada á esta causa.

La reo confiesa el hecho, excepcionándose con que las monedas le fueron entregadas por un carretero con quien tuvo un ilícito comercio. Tal explicacion fué aceptada por el ciudadano Juez de Distrito, que ab-

solvió á Dominga Lozano en su sentencia pronunciada en diez y siete de Diciembre de mil ochocientos setenta.

El Promotor no encuentra motivo para considerar divisible la confesion de la reo, admitiéndola en la parte adversa y rechazándola en la favorable; y si bien el que afirma tiene que probar lo que dice; esto tiene lugar cuando es posible esa prueba, pues nadie está obligado á lo imposible. El Promotor, cuando esto asienta, se refiere al caso presente, y no quiere se extiendan las consecuencias de esos principios, que jamas son en derecho generales, sino aplicables á determinados casos. "Omnis definitio in jure periculosa est."

En esta virtud, pide que sea confirmada por sus propios legales fundamentos, la sentencia del ciudadano Juez de Distrito de San Luis Potosí, en la que absolvió del cargo de expendedora de moneda falsa, á Dominga Lozano.

Querétaro, Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Querétaro, Febrero veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: La mañana del treinta y uno de Octubre del año próximo pasado, se encontró María Dominga Lozano, casada, mayor de edad y vecina de San Luis Potosí, en la plaza de esa ciudad, tratando de comprar dos guitarras al ciudadano Rafael Gonzalez, dándole como parte del precio de ellas un peso, que por ser falso fué devuelto por el pendedor; en cuya virtud se registró á la reo, hallándole en su poder otro peso y un real, que calificados en la casa de moneda, resultaron buenas las dos piezas últimas y falsa la primera que se circulaba, con cuyo motivo se procedió á practicar la averiguacion criminal.

La reo está con presa en la portacion de la

moneda falsa, excepcionándose con haberla adquirido de un arriero que se la diera en pago por causa torpe, cuya excepcion no se justificó, y aun cuando lo hubiera hecho, no habria servido á su objeto, en razon que los actos legales no se demuestran con medios ilícitos, como porque contra la reo existe el hecho, de que portando monedas buenas, no pagara con ellas el precio de las guitarras cuando fué devuelto el peso falso que se recogió, con lo que se demuestra el dolo de la reo, relativo á que, con entero conocimiento, circulaba la moneda falsa en perjuicio del comercio y de la persona que la recibiera, cuyo hecho constituye un delito por el propósito enunciado de la reo, con la introduccion y circulacion de la moneda; cuyo caso está incluido en el artículo 8º de la ley de 12 de Julio de 1836, cuyo rigor se halla atemperado por la facultad que se concede por la ley 8ª, título 31, partida 7ª

Por lo expuesto, y atendiendo al poco valor de la moneda falsa que se circulaba, á los padecimientos físicos que ha tenido la Lozano, y mediante los fundamentos expresados, fallo:

Se da por compurgada á María Dominga Lozano con el tiempo que ha sufrido de prision, por el delito de portacion y circulacion de moneda falsa de que se le ha hecho cargo.

Y quedando revocada la sentencia que pronunció el C. Juez de Distrito de San Luis Potosí, á diez y siete de Diciembre último; ejecútese si hubiere conformidad, librando la secretaría los recados que correspondan; y remítase esta causa á la Suprema Corte de Justicia para su revision; y dígase al ciudadano Juez enunciado, no omita las ratificaciones con citacion de la reo, que se extrañan con lo relativo á Meliton Puente y María Reyes Lozano, como practique la calificacion de las monedas mediante los peritos respectivos que declararán, y se ratificarán en forma.

El ciudadano Magistrado de Circuito, lo decretó y firmó; doy fé.—*Aurelio Ramis Portugal.*—*Ramon Reynoso.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION.

El Procurador general de la Nacion, dice: que en el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí se siguió causa contra María Dominga Lozano por circulacion de moneda falsa. De la averiguacion practicada, resulta como única prueba, la declaracion de Rafael Gonzalez, quien asegura que la Lozano le compró dos guitarras en precio de medio real, para cuyo pago le dió un peso falso; y la declaracion de esta que confiesa el hecho, excepcionándose con asegurar que ese y otro peso le fueron dados por causa torpe, sin que ella pudiese saber si eran buenos ó malos. Obra ademas un reconocimiento de las monedas, de que despues se ocupará el que suscribe.

El Juzgado de Distrito absolvió del cargo á María Dominga Lozano por falta de prueba, fundándose en la ley 1ª, título 14, partida 3ª, y el artículo 18 de la Constitucion federal. La fecha de este fallo es 17 de Diciembre de 1870.

Pasada la causa á revision al Tribunal de Circuito de Querétaro, este encontró que la culpabilidad de la Lozano estaba plenamente probada por su confesion judicial, administrada con el dicho de Rafael Gonzalez, y con el hecho comprobado de que, llevando la repetida Lozano monedas buenas, no hizo uso de estas, sino precisamente de la falsa, lo cual, en concepto del Tribunal, demuestra, que procedió con dolo. Por tal motivo, y en atencion al corto valor de la moneda, dió por compurgada á la Lozano con la prision y padecimientos sufridos, fundándose para ello en el artículo 89 de la ley de 12 de Julio de 1836, atemperando su rigor por el prudente arbitrio que concede la ley 8ª, título 31, partida 7ª. El defensor de la reo se conformó con este fallo.

El Tribunal de Circuito fijó su atencion en que dos de los testigos examinados no fueron ratificados con citacion de la reo; y en que la calificacion de las monedas, no

fué hecha como la ley previene, por dos peritos que declaren y sean ratificados en la forma legal. Respecto de este último punto, el Procurador general necesita agregar, que la calificacion vaga y absolutamente genérica que hizo el Director de la casa de moneda de San Luis, no debió ser admitida, porque los peritos tienen obligacion de declarar de una manera detallada sobre el tipo, ley y materia de las respectivas monedas.

Por las consideraciones indicadas, el Procurador general pide: se declare que la sentencia de segunda instancia ha causado ejecutoria, y que se repitan al Juez de Distrito las recomendaciones que dicho fallo contiene.

México, Marzo siete de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—L. Guzman.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Marzo diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Vista: y no apareciendo mérito para la responsabilidad, se dá por revisada esta causa, repitiéndose al Juez de Distrito, como pide el ciudadano Procurador general, las recomendaciones que contiene la sentencia del Tribunal de Circuito, remitiéndosele para los efectos consiguientes copia del pedimento del ciudadano Procurador general.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito con copia certificada de este auto para los efectos consiguientes, y archívese á su vez el Toca.

Así lo mandaron, por unanimidad de votos, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la primera sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogaszon.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramí-

rez.—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo veinti-iete de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

CONTRABANDO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Nuevo Leon por el ciudadano Administrador del Contrarresguardo de la frontera del Norte, sobre la introduccion clandestina hecha á la ciudad de Monterrey, de la cantidad de trece mil y quinientos pesos.

PROMOTORA FISCAL
del Tribunal de Circuito y Juzgado de Distrito,
del Estado de Nuevo Leon

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor Fiscal dice: que se ha impuesto por el traslado que se le ha mandado correr, del contenido de estas diligencias, practicadas con motivo de haberse intentado introducir á esta ciudad, á deshoras de la noche, y sin dar siquiera aviso á la comandancia del Contrarresguardo, unos trece mil quinientos pesos, que aparecen como procedentes del Saltillo, segun la guía que despues de la aprehension se presentó; y por el resultado que de suyo dan dichas diligencias, juzga el Fiscal, que ese Juzgado, en cumplimiento de la ley y segun lo alegado y probado, debe imponer al dinero aprehendido, bajo tales circunstancias, la multa de un seis por ciento que establece el artículo 24 de la Pauta de comisos de 28 de Diciembre de 1848, declarada vigente por varias y recientes circulares, y aún hasta por la misma de 4 de Junio último, que se acompaña al Reglamento del Contrarresguardo establecido en esta frontera.

En efecto, ciudadano Juez; las varias excepciones alegadas de contrario, para

quitar toda responsabilidad en la introduccion que se pretendia hacer de ese dinero á deshoras de la noche y sin dar aviso al Gefe del Contrarresguardo, son muy buenas para que se hubiera concedido por el Gefe de dicho Contrarresguardo el permiso respectivo, para que se hubiera entrado con el dinero á aquella hora, y para que se hubiera el conductor escusado de presentarse á la oficina respectiva; mas ellas (las excepciones), no son ni pueden ser tales, que autorizaran al conductor ó consignatario, para que entrasen á la ciudad con su carga, sin dar previo aviso al gefe de la oficina en donde tenian obligacion de presentarla, y para lo que habian sacado la guía respectiva; porque no obstante el mal tiempo que se asegura habia en esos dias, y la inseguridad de los caminos, siempre se debió ocurrir por el conductor, á la oficina del Contrarresguardo, para la presentacion de la carga que conduce, ó al menos para dar aviso de ella, á no ser que, como iba á suceder, se pretendiera entrar así clandestinamente, sin dar el menor aviso de tal carga; pero en este caso, ya el conductor debía de suponerse, si no lo sabia, que con tal proceder incurria en cierta responsabilidad, y que esta se lo haria efectiva indefectiblemente, si se lo descubria oportunamente, introduciendo su carga de la manera como se lo dicho se intentó hacer.

En cuanto á lo que se alega ahora de ignorancia del Hetero, sobre las disposiciones recordadas por la Comandancia en los varios avisos que ha publicado, y sobre imposibilidad de que llegaran á su conocimiento por haberse ausentado para el Interior antes de que se espidieran tales avisos, ya ha dicho el fiscal, que tal ignorancia de derecho no escusa. Vana empresa seria la del legislador, cerciorarse de que sus disposiciones obligatorias, habian llegado á conocimiento de todos los que tenian necesidad de obsequiarlas. Por esto es, que una vez espedita una ley, una vez sancionada, su ignorancia no escusa. Además, en el caso, hay que hacer observar esta circunstan-